



Boletín de Coyuntura | Marzo 2021

PARTE 2

EL ESCENARIO POLÍTICO: VACUNAS, INFLACIÓN Y UNA CONFRONTACIÓN SELECTIVA

En el último tramo de 2020, la dinámica política estuvo atravesada por las expectativas generadas a partir de los incipientes signos de reactivación económica, las tensiones derivadas de la corrida cambiaria y el relativo alivio al que dio lugar la estabilización de la crisis sanitaria de cara a la llegada del verano. El comienzo de año estuvo signado por cuestiones que si bien no desplazan a las mencionadas, implican ciertas novedades en los temas que explican los movimientos de las principales fuerzas sociales y actores políticos.

En primer lugar, la pandemia volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Una segunda ola azotó a los países del hemisferio norte y hubo rebrotes relevantes en países limítrofes. A nivel local, las medidas de apertura que se extendieron por todo el país, sumadas a la circulación creciente en el marco de las vacaciones de verano, se tradujeron en un aumento de casos que si bien no llegó a desbordarse sí se mantuvo en una meseta alta. Asimismo, el debate acerca de la vuelta de las clases presenciales se transformó en terreno de disputa crucial entre el oficialismo y los sectores de la oposición que gobiernan distritos importantes, con especial atención en la Caba. Desde la política asumida por el Ministerio de Educación de la Nación, el oficialismo definió no dejar este franco abierto para la acumulación de la oposición, tempranamente aseguró que la vuelta a las clases presenciales no estaba en discusión y que de lo que se trataba era de garantizar condiciones seguras. Cualquier definición al respecto era realmente compleja por la adaptación que implica para los sistemas educativos provinciales y por lo que pone en juego respecto de la vida cotidiana de las familias y la sociabilidad de niños y adolescentes. Es muy probable que con esa orientación, que no estuvo acompañada de un aumento de recursos acorde a los cambios de funcionamiento que se requieren ni por una estrategia coordinada con los principales gremios del sector, el FDT apenas haya podido aminorar los costos de un proceso que estuvo lejos de la planificación requerida. En todo caso, los gobiernos provinciales de Juntos por el Cambio, pudieron anotarse en este tema una módica victoria al quedar como quienes sostuvieron su posición desde antes y con más coherencia.

En segundo lugar, el oficialismo pudo mostrarse al cierre de 2020 como uno de los pocos gobiernos de la región que logró negociar en buenas condiciones la provisión de vacunas, algo que se vio reforzado cuando la vacuna Sputnik V recibió el aval en medios científicos internacionales. No obstante, la demora en los plazos de entrega -que el mismo presidente Fernández había anunciado- y más aún, el escándalo por los casos de vacunación por fuera del Plan Nacional, que terminó con la renuncia

de Ginés González García, colocaron a la defensiva al oficialismo, justo en el terreno en que podía hacerse más fuerte.

La otra gran cuestión que se ha constituido en un nudo determinante de la actual coyuntura es el proceso inflacionario y, en especial, el aumento de precios de los alimentos. En un contexto de alza de los precios internacionales de las materias primas, la economía argentina, crecientemente concentrada y financierizada, sufre presiones diversas. A las que provienen del frente externo, se le suman las estrategias de las empresas de producción y comercialización de alimentos que en un contexto de caída exponencial del nivel de actividad (en 2020 el PBI se redujo casi un 10%) pujan por sostener e incluso incrementar su margen de ganancia. Contenida, al menos por ahora, la corrida devaluatoria contra el peso, este es un tema crucial por varios motivos. La contención de este fenómeno de alza de precios es clave para revertir el retroceso que los ingresos populares vienen sufriendo desde hace al menos un lustro y también para darle sostén a los indicios de reactivación de la economía. En este sentido, el capital político del FDT y los resultados económicos están ligados de un modo más que evidente.

Tal como sucedió en su primer año de gestión, el accionar del Gobierno Nacional está concentrado, mayormente, en atender los distintos emergentes de una crisis que es financiera, económica y social. Son pocos los momentos en los que puede sostener una agenda y dar cuenta de los efectos positivos de las políticas que despliega. Su estrategia sigue teniendo como camino principal la concertación. Estrategia que no excluye momentos de confrontación, cuya dosificación no responde sólo a cuestiones programáticas, sino que deben ser leídos en tanto respuestas a las encerronas que le plantean sus adversarios.

Afronta un cuadro muy complejo agravado por la herencia recibida del macrismo y potenciado por la actitud sostenida por los principales actores del poder económico, mediático y judicial que pugnan por condicionar al máximo su despliegue. Pero también por sus limitaciones a la hora de apoyarse más decididamente en su base social y en los errores que remiten a una cultura política que sostiene una mirada demasiado administrativa de la acción de gobierno y que naturaliza ciertos privilegios. Paradójicamente, especialmente, en esas limitaciones de “origen” las variantes de la derecha política encuentran un terreno propicio para construir una oposición que, aunque por ahora aparezca más concentrada en contener su núcleo duro, pretende capitalizar el descontento generado por una crisis económica que se prolonga y por la incertidumbre producto de la pandemia

Los objetivos del Gobierno y la agenda del FDT

“Alinear salarios, tarifas y alimentos”, la consigna que fijó CFK en aquel acto en el Estadio Único de La Plata viene teniendo eco en la orientación seguida por el equipo de Gobierno. Si bien la eficacia de las acciones desplegadas está por verse, desde los ministerios del área económica y los funcionarios de la jefatura de Gabi-

nete que coordinan las instancias de negociación se impuso un discurso homogéneo y una política que apunta a un objetivo más bien mínimo: frenar el retroceso que vienen sufriendo los ingresos populares.

Para eso la intervención gubernamental ha tenido líneas diversas. A nivel discursivo se afirma que la pauta de inflación anual prevista por el presupuesto elaborado por el Ministerio de Economía y aprobado en el Congreso es viable, a pesar de que el nivel de inflación no bajó del 3% en los últimos tres meses. Dándole continuidad a un discurso que apuesta por el “equilibrio fiscal”, el Ministro Guzmán viene afirmando que las causas macroeconómicas del proceso inflacionario serán atacadas, en tanto el Ejecutivo se comprometió a no emitir moneda para hacer frente a las urgencias que plantea la crisis y a promover aumentos de salarios y jubilaciones que no signifiquen un salto en la demanda que derive en aumentos de precios. Junto con eso, Guzmán enfatiza en que para la recuperación es necesario un crecimiento del salario real. El Gobierno dio señales que van en ese sentido al cerrar la paritaria nacional docente en un 34,5%. Y al anunciar un aumento en jubilaciones y AUH del 8%, que será complementado con bonos para quienes perciben el haber mínimo y con un incremento del 50% en la tarjeta Alimentar.

En esta primera parte del año, las instancias de diálogo con distintos actores de la economía estuvieron a la orden del día. Por medio de diversas convocatorias, el Gobierno se mostró activo para generar espacios con sindicalistas y empresarios, con la pretensión de alinear expectativas y sobre todo mostrar que pretende fortalecer el papel del Estado como árbitro y regulador. Por un lado, hubo encuentros para trabajar sobre el eje precios y salarios. Por otro, se establecieron mesas sectoriales de diálogo pensadas para el mediano plazo. En esas instancias el mensaje del Gobierno tuvo tres premisas fundamentales. Paritarias sin techo, sin cláusula gatillo, pero con revisión. Monitoreo y control de precios. Programas de asistencia a la producción y promoción del consumo. Por otro lado, el Gobierno puso en funcionamiento el Consejo Económico y Social, una instancia en la que pretende construir acuerdos de más largo alcance, y que con la dirección de Gustavo Béliz trabajará sobre un arco de temas bien diversos. Se trata además de una propuesta de campaña de Alberto Fernández, con la que el presidente intenta poner en escena tanto su impronta acuerdista como su llamado a construir un nuevo pacto social. Toda esta línea de intervención muestra una continuidad con acciones desplegadas en los meses previos y refuerza un rasgo a destacar: la presencia dominante de las grandes corporaciones y la ausencia o el lugar testimonial de los actores pyme y del mundo de la economía popular.

Más allá de tales convocatorias y de la puesta en marcha de esas instancias de diálogo, el Gobierno atraviesa tensiones constantes que marcan la pauta de la dinámica política que promueven los sectores del gran capital. Luego de una puja que se extendió durante semanas el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los productores y exportadores de maíz que pretende evitar que la suba del precio internacional de ese producto genere desabastecimiento interno o una mayor suba de alimentos,

dado que se trata de un insumo fundamental para la producción ganadera, avícola y porcina. Luego de decretar límites diarios a las exportaciones, con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, a la cabeza, el Gobierno estableció un monitoreo permanente de las distintas variables en conjunto con el sector privado, representado por la Mesa Intersectorial del Maíz, que funcionará por lo menos hasta que la nueva cosecha genere a partir de marzo una situación más holgada. El dato político de esa negociación fue la fractura al interior de la Mesa de Enlace y la consolidación del lugar privilegiado del Consejo Agroindustrial Argentino como interlocutor empresarial del Gobierno.

A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se ha intentado ampliar los programas de control de precios y se creó el [Consejo Federal de Comercio Interior](#), con el objetivo de amplificar la capacidad de fiscalización. Además de la renovación de Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio Interior lanzó otras acciones, con efectos y alcances diversos, como los acuerdos con el sector de la [carne](#) y con productores de [aceite](#). En ese marco, desde dicha Secretaría también se [imputó a un conjunto de empresas líderes](#) en la producción de productos de consumo masivo ante la falta de mercadería en distintos centros de comercialización, en lo que se identificó como una infracción a la resolución de precios máximos y la Ley de abastecimiento.

Más allá de esta línea de acción, el horizonte aparece con turbulencias. La inflación de enero fue del 4% y se estima que la de febrero rondará el 3,5%. Las condiciones estacionales del mes de marzo hacen que sea un mes que tiende a mostrar importantes aumentos de precios. Por lo tanto, para ser realidad la pauta del 29%, fijada por el Ejecutivo, se requerirá de un cambio de tendencia pronunciado en los meses siguientes.

Sin dudas, concretar la vacunación masiva contra el Covid-19 es el otro gran objetivo del Gobierno. Si hace un año, con el inicio de la pandemia, su legitimidad se jugaba casi en pleno ante la necesidad de evitar un desborde del sistema sanitario, a esta altura la campaña de vacunación tiene un significado similar. En un contexto de disputa descarnada a nivel global, el acceso a las vacunas es determinante para evitar una segunda ola o mitigar sus efectos. Y la concreción de la campaña de vacunación es fundamental para darle aire a la tenue recuperación económica, más aún cuando desde el Ejecutivo se apuesta a no tener que destinar una masa de recursos comparable a la del año pasado para asistir a los sectores que quedarían más comprometidos con una nueva cuarentena. En este sentido, los efectos negativos del escándalo por los casos de vacunación por fuera del Plan Nacional son aún incalculables.

El Gobierno apuesta a aminorar los daños con una estrategia que combina la construcción del hecho como un “error personal” y un caso aislado, y el incremento del ritmo de inmunización de la población a partir de [la llegada sostenida](#) de más

vacunas provenientes de diversos laboratorios en los próximos dos meses. A su vez, anunció que en el mediano plazo habrá condiciones para la [producción local](#).

En medio de la dinámica marcada por la crisis económica y la pandemia, el FDT trabajó sobre algunos temas a modo de una agenda propia que remite a su vez a los sectores que conviven en su interior y a los niveles de cohesión que serán puestos a prueba en un año electoral. Entre esas iniciativas se destaca [el proyecto](#) que modifica el régimen del impuesto a las ganancias y que beneficia a más de un millón doscientos mil trabajadorxs. Promovido por Sergio Massa, cuenta con la cantidad de votos para ser aprobado en ambas cámaras del Congreso. La medida retoma reclamos de los sindicatos y también concreta una promesa incumplida por el gobierno de Cambiemos. En concreto, mejorará el poder adquisitivo de una franja, cuantitativamente significativa, de lxs asalariadxs que recibe sueldos medios, pero al mismo tiempo implica un esfuerzo fiscal importante por el monto que el Estado dejará de recaudar. Por ende, deja pendiente un debate más abarcativo respecto del sistema tributario. Asimismo, tiende a descomprimir la presión sobre los niveles salariales, y con ello también implica un beneficio indirecto para los empresarios.

Con menos repercusión mediática, el oficialismo impulsó durante el período de sesiones extraordinarias la aprobación de la [Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación](#). Cajoneada por el macrismo durante su mandato, la norma fija como objetivo de acá a diez años que el presupuesto para ese rubro represente el 1 % del PBI. Lo que significa cuatro veces más que la situación actual. Entretanto, a través de un decreto, el Gobierno Nacional [derogó el DNU](#) de Mauricio Macri que endurecía la política migratoria con un sistema de expulsiones exprés de extranjeroxs que tuvieran cualquier tipo de vinculación a cualquier tipo de causa penal, dejando así en plena vigencia la Ley de Migraciones. Si con la modificación del impuesto a las ganancias el oficialismo hace un gesto a su pata sindical y al espacio referenciado en Sergio Massa, estas últimas medidas sirven para responder demandas de su base que se ubican del centro hacia la izquierda.

Un párrafo aparte merece la definición adoptada respecto de la nueva licitación para la gestión privada de la llamada Hidrovía Paraguay-Paraná. A pesar de que en agosto, el presidente Fernández había decidido la creación de la “Administración Federal de la Hidrovia Sociedad del Estado”, tres meses después el decreto 949/20 frustró la posible [recuperación del control estatal](#) de la principal vía para el comercio exterior que tiene el país y dejó en claro que el manejo de ese espacio estratégico seguirá en manos de grupos empresarios. El llamado para concretar la nueva concesión realizado desde el [Ministerio de Transporte](#) (la actual vence en abril), generó dudas y debate entre las propias filas del Frente de Todos que por ahora solo se tradujo en el acuerdo para constituir una [comisión bicameral](#) de seguimiento.

Gestos de confrontación

El discurso de apertura de sesiones legislativas mostró a un Alberto Fernández confrontativo. A días de transitar el momento más difícil en el frente interno, producto del affair de las vacunas vip, y en el marco de un año electoral, el presidente asumió una estrategia esperable: evitar quedar colocado a la defensiva apostando por una contraofensiva que tiene en el Poder Judicial y la oposición política a sus dos blancos excluyentes. En este sentido, se trató de una intervención que estuvo en sintonía con el alegato que días más tarde pronunció la vicepresidenta, Cristina Fernández, en el marco de la causa por el dólar futuro.

En términos de anuncios, lo más destacable del discurso presidencial puede resumirse en tres decisiones. El llamado a que el Congreso asuma de manera decidida el control cruzado del Poder Judicial, para lo cual instó a conformar una comisión bicameral. La definición respecto de convertir el combate de la violencia de género en una política de Estado comparable con la actitud asumida en su momento acerca de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Definición que tuvo un correlato concreto una semana más tarde con la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, junto con todos los gobernadorxs. Y, por último, el anuncio de que el Poder Ejecutivo impulsará la investigación penal sobre los funcionarios del anterior gobierno responsables del acuerdo con el FMI que representó un endeudamiento récord de 44 mil millones de dólares.

En este punto, hay que destacar que en las últimas semanas diferentes voces del oficialismo hicieron énfasis en el hecho de que el crédito otorgado por Christine Lagarde a la gestión de Macri tuvo una finalidad geopolítica y fue aprobado para contribuir a sostenerlo en el poder. Esto, que de hecho fue admitido por funcionarios del FMI en una reunión con la CGT y que está siendo investigado al interior del propio organismo, no modifica la estrategia de no confrontación llevada a cabo hasta el momento, pero incorpora una dimensión que puede ser clave en el tramo decisivo de la negociación.

La oposición

Se cumple un año del inicio del ASPO en marzo de 2020: uno de los blancos elegidos por la oposición más radicalizada y apartada de la gestión, para confrontar con el gobierno del Frente de Todos fue la gestión de la pandemia. Primero fue la cuarentena y su extensión, la falta de libertad y coerción estatal, luego las vacunas y su dudosa eficacia, luego la apertura de escuelas, y por último, en una especie de cinta de moebius de racionamiento, la escasez de vacunas y el vacunatorio VIP. La oposición ante cada coyuntura redobla la apuesta para radicalizar sus posiciones y avanza en construir un ala de derecha conservadora en el armado de Juntos por el Cambio.

Los principales exponentes de la oposición parecen apostar a dañar cualquier estrategia planteada por el Gobierno para contener la crisis sanitaria, y, por lo general, terminan reafirmando su posición de víctima: nos quieren envenenar, nos roban las vacunas. “Emocionado y contento de ver como los argentinos se movilizan”, tuiteó el ex presidente Mauricio Macri el 27 de febrero posterior a la movilización en protesta por el vacunatorio VIP. Ese sábado, una raleada masa de Juntos por el Cambio (JxC) ocupaba una parte de la Plaza de Mayo mientras colocaba bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos y dirigentes de DDHH como Estela de Carlotto. ¿Quiénes lo organizaron? su ala de ultraderecha, la Unión Republicana (UR) y los Jóvenes Republicanos (JR). El acercamiento de Bullrich a los libertarios y este tipo de [agrupaciones de jóvenes](#) con “performances” fascistas en la Plaza de Mayo, dan cuenta de una radicalización por derecha de JxC que conduce Patricia Bullrich y que busca socavar la expectativa presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, lo más peligroso parece ser la audacia permanente de este sector por apostar a la acción directa y correr el límite de lo socialmente aceptable para disputar políticamente, al menos del '83 a esta parte.

Las disputas internas de cara a las legislativas también vienen desde adentro del radicalismo, quienes han empezado a cuestionar su posición dentro de la alianza y también la conducción de Mauricio Macri. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue el que tiró la primera piedra y dijo que el ex presidente “no es el líder” de la UCR, anticipó que el radicalismo tendrá un “candidato propio” en las presidenciales de 2023 y criticó a los “tirabombas” de la coalición opositora de derecha. No es el único que piensa esto: lo acompañan en esa idea tanto Alfredo Cornejo como Martín Lousteau. Aunque estuvo destinado al ex presidente, el mensaje también fue para el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que puja por ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio.

En la capital hubo un cruce, que sonó a adelanto de las PASO o, al menos, pone de manifiesto las disputas entre sectores del PRO: Fernán Quirós vs Patricia Bullrich. Luego de la crisis por el vacunatorio VIP, Fernán Quirós estaba respondiendo a la denuncia penal por enviar vacunas al sector privado de salud (aseguró que las prepagas y obras sociales recibirán una cantidad de dosis proporcional a sus afiliados), cuando mencionó que lo ocurrido con las vacunas a nivel nacional fue “un error grave que daña severamente la credibilidad de la campaña y eso afecta a todas las jurisdicciones, fue muy dolorosa y penosa”. Al cruce salió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien lo trató de tibio: “Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error. Tiene que haber definiciones más contundentes”. Luego, redobló la apuesta y planteó que era necesario “[democratizar la compra de vacunas](#)” permitiendo que las personas compren vacunas de acuerdo a su disponibilidad monetaria en vez de que sea el estado el que centralice la compra.

En la provincia de Buenos Aires, las piezas comenzaron a moverse en Juntos por el Cambio. Elisa Carrió apuesta a liderar la boleta este año. Hizo algunas reuniones

con los intendentes del PRO e hizo las paces con Jorge Macri, quien también podría ir como candidato. Otro actor de JxC que está con los ojos puestos en la PBA es el vicejefe porteño Diego Santilli, quien no sólo está recorriendo el territorio bonaerense, sino también auspicia de gestor de [recursos para intendentes propios](#): entregó patrulleros viejos de la policía de la ciudad en La Plata y Mar del Plata, y ya lo había hecho en Lanús en el mes de enero. La alianza de Lilita con Jorge Macri busca confrontar a Santilli con Horacio Rodríguez Larreta. Otros dos posibles candidatos provinciales son Cristian Ritondo y Martín Lousteau, quien también salió a recorrer la provincia, pero -en su caso- para militar a Gustavo Posse en la [elección interna de la UCR bonaerense](#), del 21 de marzo. Las internas en PBA se sumaron a las de [CABA](#) y [Córdoba](#).

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto y el PJ disidente [lanzaron Peronismo Republicano](#), una agrupación para disputar espacios dentro de Juntos por el Cambio. Hicieron el lanzamiento durante un acto en San Miguel. El ex candidato a vicepresidente criticó al Gobierno, reivindicó a Carlos Menem, al “peronismo de Perón” e identificó como el problema de la Argentina “la ideología del pobrismo”. Pidió “bajar la carga impositiva de los empresarios porque son los que generan empleo” y reclamó “modernizar las normas laborales: son todas leyes de los años 70 y se mantienen casi intactas” Afirmó que van a consolidar la coalición opositora para volver a ganar en 2021 y en 2023

El año electoral asoma como un laboratorio del ala radicalizada que busca sumar adhesiones ya no sólo desde el antiperonismo sino también desde la antipolítica, estrategia más fácil de desplegar lejos del gobierno. Como señala el [manifiesto de la revista crisis](#): la profunda fractura social que atravesamos y sus múltiples caras, han agudizado las contradicciones frente a una clases dominantes que no está dispuesta a negociar nada. Esta situación de crisis sin aparente solución deja a la derecha en una mejor posición para sacar tajada y ganar legitimidad. La antipolítica sobrevuela cada coyuntura, y la ultraderecha local se encarga de vestirse de antisistema para llamar a la rebeldía de la juventud y de los desencantados. El acercamiento de Bullrich con Milei y otros exponentes libertarios apunta a [canalizar por derecha un descontento](#) creciente con un sistema que no da respuestas y que ubica a los “políticos” como los principales responsables.

En este sentido, Marisa Duarte (directora del IADE) señala en esta [entrevista](#) que uno de los grandes desafíos que presenta la alianza del Frente de Todxs es lograr satisfacer las diversas expectativas que tienen sus diferentes partes frente a una derecha que desafía permanentemente y una crisis económica que deja en mejores condiciones a los sectores concentrados. Afirmó: “En la región hay una disputa en la cual la derecha tiene absolutamente claro hacia dónde debe ir, mientras que en el espectro de la izquierda asistimos a un debate constante entre la radicalización de las propuestas y cierta dilución de determinadas banderas. Esa tensión (...) puede ser una forma gradual de ir camino hacia la derechización de las sociedades, e incluso de los propios movimientos”. Sin dudas, unos de los grandes desafíos del

campo popular en este año no sólo se ciñe a lo electoral sino, sobre todo, a dar respuesta a los grandes malestares de la población y ofrecer una salida política que gane logre salir del callejón de lo posible.



tricontinental

Instituto Tricontinental de Investigación Social
*es una institución promovida por los movimientos,
dedicada a estimular el debate intelectual al servicio de
las aspiraciones del pueblo.*

www.eltricontinental.org

 @tricontinental_ar

 thetricontinental

 @tricon_es

 americalatina@thetricontinental.org